



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

**Bogotá D.C.**

Señora

**IRENE VÉLEZ TORRES**

Ministra (E) de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Calle 37 No. 8 – 40

Bogotá, Colombia

Correos electrónico: [info@minambiente.gov.co](mailto:info@minambiente.gov.co) ; [lcramos@minambiente.gov.co](mailto:lcramos@minambiente.gov.co);  
[ojuridica@minambiente.gov.co](mailto:ojuridica@minambiente.gov.co)

**ASUNTO:** Respuesta solicitud de concepto de procedencia de la consulta previa en el marco del proceso de ratificación del Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica, en el marco del trámite de ratificación del instrumento.

Reciba cordial saludo, señora Irene

Esta Dirección el día 29 de septiembre de 2025, recibió mediante radicados de ControlDoc 2025-1-002410-079185 Id Control: 620524 y 2025-1-002410-079448 Id Control: 621011, solicitud de concepto técnico-jurídico de determinación de procedencia de la consulta previa para el proyecto de resolución *“Por medio de la cual se declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”*

De modo que, con la finalidad de dar respuesta a su solicitud de concepto técnico – jurídico de procedencia de la consulta previa sobre el proyecto indicado en el asunto, este Despacho procede a emitirlo basado en las siguientes consideraciones:

#### **1. De la competencia de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa**

El Decreto 2353 de 2019 por medio del artículo 4 sustituyó los artículos 16 y 16A del Decreto 2893 de 2011 y adicionó los artículos 16B, 16C y 16D. En particular, el numeral 1 del artículo 16A del Decreto 2353 de 2019, dispuso como función de la Subdirección Técnica de Consulta Previa:

*“Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”.*

Por lo anterior, **quien pretenda ejecutar un proyecto, obra o actividad, o implementar una medida legislativa o administrativa** deberá solicitar a este despacho



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

pronunciamiento sobre la procedencia y oportunidad de la consulta previa, y con base en el análisis de la afectación directa que el proyecto o medida pueda generar sobre la comunidad étnica, este despacho determinará si es procedente o no adelantar proceso de consulta previa.

Teniendo en cuenta lo anterior, esta Subdirección Técnica tiene competencia de responder la solicitud de la referencia, ya que es una competencia que ha sido fijada de manera única y exclusiva a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.

## **2. De la Consulta Previa:**

El derecho a la Consulta Previa tiene sustento en principios reconocidos desde el mismo preámbulo de nuestra Carta Política y reiterados a lo largo del texto constitucional. En primera medida, encontramos precisamente que la Constitución Política estableció como uno de los pilares de nuestro Estado Social de Derecho el principio de participación democrática (*preámbulo, Art. 1º*), y como fin esencial del Estado, el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan.

Así mismo, nuestra Carta Fundamental reconoció que Colombia es un Estado pluralista que garantiza y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación (*Art. 1º, 7º, 8º, 10º*).

De igual manera, el artículo 330 de la Constitución Política establece con relación a los territorios indígenas, lo siguiente:

*“Artículo 330: De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:*

*(...) PARÁGRAFO. La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.”*

En virtud de lo anterior y en consonancia con el compromiso de establecer especial protección a la diversidad étnica y cultural del país, el Estado Colombiano suscribió el Convenio 169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado e incorporado a nuestro ordenamiento jurídico mediante Ley 21 de 1991, haciendo parte del bloque de constitucionalidad.

El mencionado Convenio consagra en el artículo 6º, el derecho a la Consulta Previa de los pueblos indígenas, conforme al siguiente texto:



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

***“1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:***

***a) Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlas directamente (...)***

A su turno, el artículo 7° ibidem, dispone:

***“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.***

***Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente.”***

### **3. De la afectación directa:**

De acuerdo con los acápites precedentes, de manera general puede afirmarse que la consulta previa procede, en principio, frente a dos tipos de decisiones o medidas: **i)** la ejecución de proyectos, obras o actividades, y **ii)** la adopción de medidas administrativas o legislativas de carácter general. En ambas situaciones lo que determina la obligatoriedad de la consulta previa, es que las medidas o decisiones que se pretendan adoptar causen una afectación específica y directa en las comunidades étnicas.

En sentencia T-800 del 31 de octubre de 2014, recogiendo otros pronunciamientos sobre la materia, nuestro máximo Tribunal Constitucional identificó una serie de criterios para determinar aquellos casos en los cuales las *medidas administrativas o legislativas*, ocasionan una afectación directa:

***“La sentencia C-030 de 2008, precisó que por afectación directa debe entenderse toda medida que “altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios”. En tal sentido, sostuvo que la afectación directa se da sin importar que sea positiva o negativa, pues es precisamente dicho aspecto el que deberá resolverse al consultar a los pueblos indígenas afectados.***

***Ahora bien, entrando más a fondo, a efectos de determinar cuál es el grado de afectación, se señala que la especificidad que se requiere para que una medida deba ser sometida a consulta, “se puede derivar o bien del hecho de que regula una de las materias del Convenio 169 de la OIT, o bien de que, aunque ha sido concebida de***



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*manera general, tiene una repercusión directa sobre los pueblos indígenas”. Es decir, “puede ser el resultado de una decisión expresa de expedir una regulación en el ámbito de las materias previstas en el convenio, o puede provenir del contenido de la medida como tal, que, aunque concebida con alcance general, repercuta de manera directa sobre las comunidades indígenas y tribales.” (Subrayado fuera de texto)*

Así mismo, reiterando lo antes expuesto, la Corte Constitucional mediante sentencia de unificación 123 del 15 de noviembre de 2018 recogió algunos pronunciamientos al respecto de la afectación directa a las minorías étnicas e indicó que ésta existe cuando:

- (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en salud y ocupacionales;
- (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas dentro del territorio de la minoría étnica;
- (iii) se imposibilita realizar los oficios de los que se deriva el sustento y
- (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en otro lugar distinto a su territorio.

#### 4. Procedencia de la Consulta Previa por la implementación de medidas administrativas o legislativas

Ahora bien, tratándose específicamente de medidas administrativas o legislativas de carácter general, la Corte Constitucional se ha ocupado a través de su jurisprudencia de fijar los criterios de procedencia, elementos y alcance del derecho a la consulta previa, destacándose los siguientes pronunciamientos:

*“Es así como para el caso particular de las comunidades indígenas y afrodescendientes, existen previsiones constitucionales expresas, que imponen deberes particulares a cargo del Estado, dirigidos a la preservación de las mismas y la garantía de espacios suficientes y adecuados de participación en las decisiones que las afectan. Ello, sumado al contenido y alcance de normas de derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad, ha permitido que la jurisprudencia de esta Corporación haya identificado un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afrodescendientes a la consulta previa de las decisiones legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente.” (Resaltado fuera de texto original)*

Más adelante expresa que, la trascendencia de la denominada afectación directa, como criterio fundamental de procedencia de la Consulta previa, destacando que cuando la medida legislativa resulta de carácter general, esto es, cuando sus efectos se derivan a todos los ciudadanos por igual, incluidas las comunidades étnicas, no será necesario realizar el proceso consultivo, en palabras del alto tribunal:



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*“Para el caso particular de las medidas legislativas, la consulta se predica sólo de aquellas disposiciones legales que tengan la posibilidad de **afectar directamente** los intereses de las comunidades, por lo que, aquellas medidas legislativas de carácter general, que afectan de **forma igualmente uniforme a todos los ciudadanos**, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales, **no están sujetas al deber de consulta**, excepto cuando esa normatividad general tenga previsiones expresas, comprendidas en el ámbito del Convenio 169 de la OIT, que sí interfieran esos intereses.”* (Resaltado y subraya fuera de texto original).

“(…)

*“En armonía con estas consideraciones, el deber de consulta previa respecto de medidas legislativas, resulta jurídicamente exigible cuando las mismas **afecten directamente** a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Ello sucede cuando la materia del proyecto está relacionada con aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad étnica de dichos grupos. Por ende, **no existirá deber de consulta** cuando la medida legislativa no pueda predicarse de forma particular a los pueblos indígenas y tribales y, a su vez, el asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y objetivamente, conformen la identidad de la comunidad diferenciada.* (Resaltado y subraya fuera de texto original).

*Así, de acuerdo con el precedente constitucional estudiado en esta sentencia, para acreditar la exigencia de la consulta previa, debe determinarse si la materia de la medida legislativa tiene un vínculo necesario con la definición del ethos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. En otras palabras, el deber gubernamental consiste en identificar si los proyectos de legislación que pondrá a consideración del Congreso contienen aspectos que inciden directamente en la definición de la identidad de las citadas indígenas y, por ende, su previa discusión se inscribe dentro del mandato de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. Como se señaló en la sentencia C-030/08, uno de los parámetros para identificar las medidas legislativas susceptibles de consulta es su relación con las materias reguladas por el Convenio 169 de la OIT.* (Resaltado fuera de texto original).

En ese orden, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la identificación de las medidas que afectan directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes se adelanta en cada caso concreto. Sin embargo, en sentencia C-366 del 11 de mayo de 2011, la Corte Constitucional identificó algunas materias que deben ser objeto de consulta previa. Veamos:

*“En ese orden de ideas, las decisiones de la Corte han concluido, aunque sin ningún propósito de exhaustividad, que materias como el territorio, el aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales en las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas, son asuntos que deben ser objeto de consulta*



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*previa. Ello en el entendido que la definición de la identidad de las comunidades diferenciadas está estrechamente vinculada con la relación que estas tienen con la tierra y la manera particular como la conciben, completamente distinta de la comprensión patrimonial y de aprovechamiento económico, propia de la práctica social mayoritaria. A esta materia se suman otras, esta vez relacionadas con la protección del grado de autonomía que la Constitución reconoce a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Así, en virtud de lo regulado por los artículos 329 y 330 C.P., deberán estar sometidos al trámite de consulta previa los asuntos relacionados con la conformación, delimitación y relaciones con las demás entidades locales de las unidades territoriales de las comunidades indígenas; al igual que los aspectos propios del gobierno de los territorios donde habitan las comunidades indígenas; entre ellos la explotación de los recursos naturales en los mismos. Esto último según lo regulado por el parágrafo del artículo 330 C.P. el cual prevé que dicha explotación, cuando se realiza en los territorios indígenas, se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades diferenciadas. Por ende, en las decisiones que se adopten al respecto, el Gobierno debe propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades. (Resaltado fuera de texto original).*

Posteriormente, la Corte Constitucional, ratificó los elementos que determinan la procedencia de la Consulta Previa de decisiones administrativas de carácter general o proyectos de ley en la Sentencia C-490 del 23 de junio de 2011, en los siguientes términos:

*“Como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, de las normas constitucionales que prevén el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural y, en especial, de las reglas previstas en el artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, norma integrante del bloque de constitucionalidad, concurre un derecho fundamental a la consulta previa, consistente en que aquellas **decisiones legislativas o administrativas que afecten directamente a las comunidades indígenas o afrodescendientes, deben ser consultadas con ellas por parte del Gobierno**, bajo condiciones de buena fe y respeto por su identidad diferenciada. A su vez, ese mismo precedente dispone que (i) la afectación directa que obliga a la consulta refiera a la regulación de asuntos que conciernen a la comunidad diferenciada o que, **siendo de carácter general, tienen incidencia verificable en la conformación de su identidad**; y (ii) la omisión de la consulta previa, cuando se trata de medidas legislativa, genera prima facie la inexequibilidad de la norma correspondiente, puesto que se trata de un vicio que, aunque tiene naturaleza sustantiva, afecta el trámite legislativo. Esto explica que, por razones metodológicas, el análisis sobre el cumplimiento del deber de consulta previa haga parte del estudio formal de la iniciativa, aunque en estricto sentido no haga parte del procedimiento de formación de la ley. (Resaltado fuera de texto original).*

Continuando con los pronunciamientos sobre la materia, la Corte Constitucional en el pronunciamiento T-800 del 31 de octubre de 2014 expresó que:





Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*“el criterio de afectación directa que determina la obligatoriedad de la consulta hace referencia a un posible impacto sobre la autonomía, diversidad e idiosincrasia de la comunidad étnica o tribal. La Corte ha calificado como **eventos de afectación directa las medidas que resulten virtualmente nocivas o que generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales de estos pueblos**”* (Resaltado fuera de texto original)

Luego, mediante Sentencia T-307 del 27 de julio de 2018, la Corte Constitucional recordó que la jurisprudencia ha decantado que no sobre toda medida legislativa o administrativa procede la consulta previa, es sobre aquellas que generen una afectación directa a los intereses de las comunidades étnicas y explica:

*“es decir, las que tienen la potencialidad de **alterar su status personal o colectivo**, ya sea por imponerle restricciones o gravámenes o por conferirle beneficios o dádivas (...)”*. (Negrita fuera de texto original)

En el mencionado fallo, se trae a colación lo resuelto en la Sentencia C-389 de 2016, en donde se señaló que la afectación directa de la comunidad étnica por la implementación de una medida legislativa o administrativa se concreta en los siguientes casos:

*“De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de esta Corte, el ámbito material de aplicación de la consulta no se ciñe a determinados supuestos hipotéticos. Si bien los eventos explícitamente mencionados en la Constitución Política y los documentos relevantes del DIDH deben considerarse relevantes, estos no agotan la obligación estatal, pero **el concepto clave para analizar la procedencia de la consulta previa es el de afectación directa**. Esta expresión, por supuesto, es amplia e indeterminada, lo que puede ocasionar distintas disputas interpretativas. Sin embargo, actualmente, la Corte ha desarrollado un conjunto de estándares que permiten evaluar al operador jurídico, si una medida, norma o proyecto afecta directamente a los pueblos indígenas: (i) **la afectación directa hace alusión a la intervención que una medida (política, plan o proyecto) determinada presenta sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales;** (ii) **el hecho de que la medida se orienta a desarrollar el Convenio 169 de la OIT, y (iii) la imposición de cargas o atribución de beneficios a una comunidad, de tal manera que modifique su situación o posición jurídica;** (iv) **la interferencia en elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido;** y (v) **se trata de una medida general que, sin embargo, afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente diferenciados**. Evidentemente, se trata de criterios de apreciación que no cierran por completo la vaguedad del concepto de afectación directa y mantienen de esa forma la importancia de una evaluación caso a caso sobre la obligatoriedad de la medida. Pero constituyen, sin embargo, una orientación suficiente para el desempeño de esa tarea en términos*



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*acordes a los principios de razonabilidad y proporcionalidad” (Negrita fuera del texto original).*

Más adelante, la sentencia SU-123 de 2018 unificó los criterios de procedencia de la consulta previa (SU 123 de 2018), indicando que esta procede cuando:

- (i) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales;
- (ii) cuando la medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT;
- (iii) así mismo si se imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que modifiquen su situación o posición jurídica;
- (iv) o por la interferencia en los elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido.

Por consiguiente, de conformidad con los precedentes jurisprudenciales en cita, el análisis de la procedencia o no de la consulta de medidas administrativas o legislativas, se hará observando los siguientes criterios:

1. La decisión administrativa o legislativa debe ser susceptible de afectar directamente los intereses de las comunidades étnicas. Para efectos de la consulta previa, se entiende que hay afectación directa cuando:
  - a. Se regula una de las materias del Convenio 169 de la OIT.
  - b. El proyecto normativo refiera a la regulación de asuntos que conciernen a la comunidad diferenciada o que,
  - c. La regulación tenga una incidencia verificable en la conformación de su identidad.
  - d. Las medidas resulten virtualmente nocivas.
  - e. Medidas que generen una intromisión intolerable en las dinámicas económicas, sociales y culturales de estos pueblos.
2. No están sujetas al deber de consulta las medidas administrativas o legislativas de carácter general, cuando:
  - a. Las mismas afectan de forma uniforme a todos los ciudadanos, entre ellos los miembros de las comunidades tradicionales.
  - b. La medida no se predique de forma particular a los pueblos indígenas y tribales.
  - c. El asunto regulado no tenga relación con aspectos que, razonable y objetivamente, conformen la identidad de la comunidad diferenciada.

Así mismo, será exigible el deber de consulta en todos aquellos casos en los que el contenido de las medidas administrativas o legislativas se refiera específicamente a los siguientes aspectos:





Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

- El aprovechamiento de la tierra rural y forestal o la explotación de recursos naturales en las zonas en que se asientan las comunidades diferenciadas.
- La conformación, delimitación y relaciones con las demás entidades locales de las unidades territoriales de las comunidades indígenas.
- Aspectos propios del gobierno de los territorios donde habitan las comunidades indígenas.
- Explotación de recursos naturales en los territorios de las comunidades étnicas.
- La medida afecta con especial intensidad o de manera diferenciada a los pueblos étnicamente diferenciados.

## 5. Del análisis para el caso en concreto:

Hechas las anteriores precisiones, procedemos a revisar de manera concreta el proyecto de resolución *“Por medio de la cual se declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”*

De acuerdo con la información técnica y jurídica entregada, el proyecto de resolución pretende establecer de manera definitiva una zona de reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico. La iniciativa tiene como objetivo implementar medidas de restauración, conservación y protección integral del ecosistema, dadas sus funciones críticas en la regulación climática, el ciclo hidrológico y la captura de carbono a nivel regional y global, con base en criterios técnicos y normativos.

Así las cosas, el contenido propuesto para la iniciativa será el siguiente:

“(…)

**Artículo 1. Objeto.** *Delimitar y declarar una Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico con carácter definitivo.*

**Artículo 2. Ámbito de aplicación.** *Las disposiciones que se adoptan en la presente resolución serán aplicables al bioma amazónico, con una extensión de 483.283,55 km<sup>2</sup>, y delimitado mediante salida gráfica, el archivo geográfico en formato shapefile, en el sistema de referencia horizontal MAGNA-SIRGAS Origen Nacional EPSG 9377 y el cuadro de coordenadas de los vértices, que hacen parte integral del presente acto administrativo (Anexo\_Cartografía).*

**Artículo 3. Efectos.** *De conformidad con la información técnica y científica del Documento Técnico de Soporte, el cual hace parte integral del presente acto, y en virtud de los principios generales ambientales de prevención y precaución ambiental, la declaración del bioma amazónico como Reserva de Recursos Naturales Renovables y zona de protección y desarrollo de los recursos naturales renovables y del ambiente, tiene las siguientes consecuencias jurídicas y administrativas:*

1. *No podrán ejecutarse trabajos y obras de exploración y explotación minera; la autoridad minera competente no podrá otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales*



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*para la exploración o explotación de minerales. Lo anterior, sin perjuicio de las autorizaciones temporales para el aprovechamiento de materiales pétreos, de que trata el artículo 116 de la Ley 685 de 2001, en cumplimiento estricto de la normatividad ambiental y obteniendo, en caso de requerirse, el respectivo permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad ambiental competente.*

2. *No podrán ejecutarse actividades de exploración y explotación de hidrocarburos; la Agencia Nacional de Hidrocarburos no podrá celebrar contratos ni convenios de exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la Nación, ni contratos de evaluación técnica -TEA, ni cualquier otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales para la exploración o explotación de hidrocarburos.*
3. *Las autoridades ambientales competentes no podrán otorgar nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de minerales e hidrocarburos.*

**Parágrafo 1.** *La presente reserva de recursos naturales renovables no tendrá efectos de exclusión de concesión o autorización de uso a particulares distintos a los dispuestos en el presente artículo. Igualmente, la reserva declarada no afecta el derecho de disposición de los predios privados, ni constituye una limitante para los procesos formalización de la propiedad o de adjudicación de tierras, de carácter individual o colectivo.*

**Parágrafo 2.** *La declaratoria de la reserva de recursos naturales renovables del bioma amazónico no modifica el régimen jurídico ni los usos de las áreas protegidas, otras estrategias de conservación in situ u otras determinantes ambientales existentes en el área reservada, a excepción de las consecuencias jurídicas y administrativas descritas en el presente artículo, siempre que estas no sean menos restrictivas frente al desarrollo de actividades mineras y de hidrocarburos.*

**Parágrafo 3.** *La declaratoria de la reserva de recursos naturales renovables del bioma amazónico no interfiere ni sustituye el ejercicio de las autoridades ambientales, en el ámbito de su respectiva jurisdicción y competencias. Tampoco afecta el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas, y de comunidades negras, afrodescendientes, campesinas, al interior de sus territorios, ni sus competencias en materia de ordenamiento ambiental territorial, determinación de los mecanismos regulatorios, de gestión y gobierno con fines de preservación, conservación, restauración, protección, cuidado, uso y manejo de los recursos naturales de acuerdo con lo establecido en Decreto Ley 1275 de 2024, Decreto 1384 de 2023, Decreto 1147 de 2024, y demás normatividad aplicable, en concordancia con el marco constitucional.*

**Artículo 4. Alcances de la reserva sobre proyectos en curso.** *Sin perjuicio de los efectos establecidos en el artículo anterior, se dispone lo siguiente en relación con los proyectos que se desarrollan dentro de la reserva de recursos naturales renovables objeto de este decreto:*

1. *Los proyectos de explotación minera que cuenten con título minero, instrumento técnico minero aprobado e instrumento ambiental vigentes, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin derecho a prórroga. El plan de cierre definitivo deberá realizarse de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental competente.*
2. *Los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que se desarrollen a través de Contratos o Convenios de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, tengan Aviso de Descubrimiento y cuenten con licencia ambiental o instrumento ambiental vigentes, podrán seguir ejecutándose hasta su terminación, sin derecho a prórroga. El plan de*



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*desmantelamiento, cierre y abandono deberá realizarse de acuerdo con lo establecido por la autoridad ambiental competente.*

3. *En la etapa de explotación minera, las solicitudes de modificación de licencia ambiental serán procedentes, excepto cuando su objetivo sea la ampliación de nuevas áreas mineras o el aumento de los volúmenes de explotación, respecto de los inicialmente autorizados.*
4. *En la etapa de exploración minera, las solicitudes de modificación de los permisos, autorizaciones o concesiones ambientales serán procedentes en vigencia de la Reserva.*
5. *En materia de explotación de hidrocarburos, las solicitudes de modificación de licencia ambiental serán procedentes, excepto cuando su objetivo sea la ampliación de nuevas áreas o cuando se pretendan variar las condiciones de uso, aprovechamiento o afectación de un recurso natural renovable, de forma que se genere un mayor impacto respecto a lo ya autorizado. Igualmente, serán procedentes las obras o actividades consideradas cambios menores o de ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos del sector hidrocarburos, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 0855 de 2022 o lo que establezca la autoridad ambiental competente.*

**Artículo 5. Planes, programas, proyectos y acciones de restauración, conservación, preservación y uso sostenible de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en aplicación de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las autoridades ambientales, las demás entidades del SINA, las entidades de los otros sectores administrativos, y con la participación de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinado, organizaciones no gubernamentales, de base comunitaria y de cooperación internacional, promoverá, formulará y avanzará en la implementación de programas, planes, proyectos y acciones orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico, así como de uso o manejo sostenible de los mismos.

**Artículo 6. Enfoque de los planes, programas y acciones de restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico.** La formulación y desarrollo de los programas, planes y proyectos orientados a la restauración, conservación y preservación de los recursos naturales y del ambiente en el bioma amazónico, así como de uso y manejo sostenible de los mismos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las entidades del SINA y demás actores deberán tomar en consideración:

1. *Promover el tránsito de núcleos activos de deforestación hacia Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad, de conformidad con la Política de Deforestación y de Crecimiento Verde (Documentos CONPES 4021 y 3934), el Plan Nacional de Restauración, el Plan Integral de Contención de la Deforestación -PICD- (2023-2026), la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, entre otros.*
2. *Priorizar acciones estratégicas, planes, proyectos y programas en los Núcleos de Desarrollo Forestal y de Biodiversidad, de conformidad con lo previsto en la Política de Deforestación y de Crecimiento Verde (Documentos CONPES 4021 y 3934), el Plan Nacional de Restauración, el Plan Integral de Contención de la Deforestación -PICD- (2023-2026), la Estrategia Integral de*



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

*Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, la Estrategia Nacional de Restauración 2023-2026 y el Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia al 2030, entre otros.*

*3. Propender por el desarrollo de la economía forestal y de la biodiversidad, el manejo forestal sostenible y la bioeconomía, entre otros, a fin de contener la deforestación y como alternativas productivas para el bioma amazónico.*

*4. Estar dirigidos a las comunidades locales, campesinas y étnicas, y organizaciones de base comunitaria que cuenten con arraigo territorial en el bioma amazónico.*

**Artículo 7. Incorporación y actualización de los sistemas de información.** Dentro de los cinco (5) días siguientes a su publicación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, comunicará el presente acto administrativo a la Agencia Nacional de Minería y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, para que incorporen la Reserva de Recursos Naturales Renovables del Bioma Amazónico en el Sistema Integral de Gestión Minera -SIGM- y en el Mapa de Tierras de áreas hidrocarburíferas, respectivamente, o en los sistemas de información que hagan sus veces, a fin de garantizar la eficacia de la declaratoria.

**Artículo 8. Comunicaciones.** Comuníquese la presente Resolución a el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Servicio Geológico Colombiano, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI", la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico CDA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia CORPOAMAZONIA, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena CORMACARENA, las Gobernaciones de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés, Cauca, Nariño y Meta, y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Minero Energéticos.

**Artículo 9. Vigencia del acto administrativo.** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial. (...).

En consecuencia, desarrollado el análisis jurisprudencial y fáctico para el proyecto de resolución *"Por medio de la cual se declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones"*, esta Autoridad Administrativa concluye lo siguiente:

1. Que, el proyecto de resolución regula aspectos concretos y de especial interés colectivo para los pueblos étnicos, como la delimitación de los territorios en los que se desarrollan actividades y prácticas tradicionalmente ligadas a su cultura, historia y formas de subsistencia. En este contexto, se identificaron 566 comunidades étnicas que habitan en el territorio a delimitar.
2. Que, en cumplimiento del deber de interpretación intercultural, es fundamental valorar y respetar el conocimiento propio de los pueblos étnicos, así como sus métodos tradicionales para identificar y relacionarse con su territorio. Por lo tanto,



Al contestar cite Radicado 2025-2-002410-044834 Id: 628884

Folios: 13 Fecha: 09-10-2025 15:34:17

Anexos: 0

Remitente: DIRECCION DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

Destinatario: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO DE COLOMBIA. 0 Y

cualquier figura de reserva que se cree debe reconocer y garantizar la autoridad legítima de estas comunidades y sus sistemas tradicionales de uso y manejo del territorio, incluyendo sus prácticas culturales, espirituales y de subsistencia, acorde con su cosmovisión.

3. Que, el desarrollo de la medida podría establecer limitaciones, nuevas cargas o restricciones a las comunidades étnicas a las que conforme a derecho se les otorgaron concesiones mineras en el territorio objeto de análisis.
4. Que, la creación de una reserva de recursos naturales a pesar de ser una herramienta institucional que busca prevenir impactos graves o irreversibles. Puede ocasionar una transformación a los modos de vida tradicionales, afectando la identidad cultural y la transmisión intergeneracional de saberes.
5. Que la medida podría generar una posible afectación a las comunidades étnicas de la región, dado que estas desarrollan dinámicas económicas, sociales y culturales en torno a los proyectos que se implementan en sus territorios. En este sentido, la prohibición establecida podría limitar, eventualmente, oficios y medios de subsistencia vinculados a la explotación de recursos mineros o de hidrocarburos, así como restringir ingresos futuros derivados de estas actividades, ya sea a través de la prestación de servicios, regalías u otras formas de participación económica.

En suma, el proyecto de resolución *“Por medio de la cual se declara una reserva de recursos naturales renovables en el bioma amazónico colombiano, y se adoptan otras determinaciones”*, esta Autoridad Administrativa concluye lo siguiente: **es una medida administrativa** sujeta al desarrollo de consulta previa.

De lo anterior, es importante como Autoridad en la materia mencionar que las comunidades étnicas consultadas serán en todo caso aquellas inmersas en la delimitación de la Reserva de Recursos Naturales Renovables en el bioma amazónico. En estos términos damos respuesta a su solicitud, no sin antes manifestarle nuestra disposición para atender cualquier inquietud adicional.

Atentamente,



**ALFONSO ENRIQUE JIMENEZ ECHEVERRIA**  
**Subdirector Técnico de Consulta Previa**

Elaboró: Alicianna Paba- . Abogada contratista ST.

Revisó: Simón Latorre – Coordinador Grupo de actuaciones administrativas

Aprobó: Alfonso Jiménez– Subdirector técnico